

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	: LUZ AMPARO RAMIREZ ATEHORTUA
DEMANDADO	: PROTECCION S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-021-2021-00080-01
RADICADO INTERNO	: 309-22
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 373

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los recursos de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante, solicita se DECLARE que es beneficiaria de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su hijo Sergio Daniel Marín Ramírez sucedido el 8 de junio del 2019 y que, en consecuencia, se CONDENE a Protección S.A al reconocimiento y pago de dicha prestación a partir de la fecha de su fallecimiento con los reajustes anuales, las mesadas adicionales, los intereses moratorios o subsidiariamente la indexación, y las costas del proceso.

Fundamentan sus pretensiones en que PROTECCIÓN S.A., el 22 de agosto de 2019, notificó a los señores LUZ AMPARO RAMIREZ ATEHORTUA y ROBERTO ALVARO MARIN GOMEZ, en sus condiciones de padres del afiliado SERGIO DANIEL MARIN RAMIREZ, el inicio de la solicitud de prestación económica – sobrevivencia, y dicha entidad el 18 de octubre de 2019, notificó a los señores LUZ AMPARO RAMIREZ ATEHORTUA y ROBERTO ALVARO MARIN GOMEZ, la negativa de la solicitud presentada, argumentando que no

existía dependencia económica, y se les informó, que la devolución de saldos solamente se haría efectiva una vez fuera presentado el fallo del juicio de sucesión, detallando el saldo existente en la cuenta del afiliado. Que el 30 de octubre de 2019, por intermedio de apoderado, solicitó ante PROTECCIÓN S.A., el informe investigativo que sirvió de sustento para negar la pensión de sobrevivientes reclamada, recibiendo respuesta negativa el 21 de enero de 2020, bajo la consideración que había reserva bancaria. El 19 de febrero de 2020, la señora LUZ AMPARO RAMIREZ ATEHORTUA, en su condición de madre, solicitó ante PROTECCIÓN S.A., el informe investigativo que sirvió de sustento para negar la pensión de sobrevivientes reclamada con ocasión del fallecimiento de su hijo, recibiendo respuesta el 21 de febrero de 2020, mediante el cual le allegó copia del expediente administrativo y le informó que el documento de la visita domiciliaria realizada, está sometida a reserva teniendo en cuenta que contiene información de terceros. Que el 26 de junio de 2020, el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en fallo de tutela de radicado 2020-00339, tuteló los derechos fundamentales invocados por LUZ AMPARO RAMIREZ ATEHORTUA, ordenando a PROTECCIÓN S.A., procediera a expedir el informe investigativo que sirvió de sustento para negar la pensión de sobrevivencia reclamada, y dicha entidad el 1 de julio de 2020, expidió copia del expediente administrativo, incluyendo los documentos de la investigación administrativa realizada. Que el 29 de julio de 2020, se allegó ante PROTECCIÓN S.A., juicio de sucesión en original, con repudio hecho por el señor ROBERTO ALVARO MARIN GOMEZ, en su condición de padre, en favor de la masa herencial, por lo que PROTECCIÓN S.A., el 08 de octubre de 2020, certificó, que la señora LUZ AMPARO RAMIREZ ATEHORTUA, recibió devolución de Saldos de Sobrevivencia, por valor de \$14.583.020, generada el 07 de septiembre de 2020. Que el causante, siendo soltero y sin hijos, falleció el 08 de junio de 2019 y para esta fecha acredita más de 50 semanas sufragadas dentro de los tres años inmediatamente anteriores, y que para dicha fecha la demandante que dependía económicamente de su hijo SERGIO DANIEL MARIN RAMIREZ, quien le proveía lo necesario para su subsistencia, al no tener ella ingresos que le permitiera ser autosuficiente. Que Protección S.A. encontró probado en el informe de investigación del 12/09/2019, que la demandante se encontraba afiliada a la EPS Suramericana S.A., en calidad de beneficiaria por parte de su hijo SERGIO DANIEL MARIN RAMIREZ a partir del 09 de noviembre de 2013. Que, vencido el mes del fallecimiento de SERGIO DANIEL, la demandante quedó desvinculada de la EPS Sura S.A. y en la actualidad, se encuentra en el régimen subsidiado en salud. Que, en la entrevista hecha al padre del causante del 23 de septiembre de 2019, que

reposa en el informe de investigación hecho por PROTECCIÓN S.A., éste manifestó:

“YO ALVARO DOY FÉ QUE MI HIJO SERGIO DANIEL MARIN RAMIREZ ERA QUIEN VEIA ECONOMICAMENTE POR MI ESPOSA. LUZ AMPARO RAMIREZ...”

Que la demandante sintió presión en la entrevista realizada por el funcionario en quien Protección S.A. delegó la investigación, quien según lo indica ésta, le sugería en no buenos términos, como debía orientar sus respuestas, siendo su hija Jenny Marcela quien transcribía las respuestas sugeridas por el investigador Tomas Andrés. Que no existe prueba en la investigación, que a la demandante se le enterara del derecho que le asistía de haber estado acompañada de un abogado que velara por el respeto del debido proceso dentro de la investigación y entrevista a la que fue sometida por parte de Protección S.A. Que de otro lado se observa de la lectura del informe de la investigación, un sesgo, ya que se orienta a demostrar el aporte para el sostenimiento del hogar y no a acreditar o desvirtuar la dependencia de la demandante respecto de su hijo.

CONTESTACION DE PROTECCION S.A

Esta entidad dio respuesta manifestando que acepta como ciertas todas las reclamaciones presentadas ante dicha entidad relacionadas en el escrito de la demandada así como las respuestas dadas a las mismas, pero no aceptó que existiera dependencia económica de la demandante frente al hijo fallecido, precisando además que es cierto que no se le informó a la demandante que debía contar con abogado al no ser necesario por tratarse de una actuación administrativa y que tampoco fue presionada al momento de realizarse la investigación administrativa, por lo que indica que no existe lugar a la prosperidad de las pretensiones al no existir dependencia económica oponiéndose de esta forma a todas las pretensiones de la demanda, y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, imposibilidad del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cobro de lo no debido, pago y compensación, improcedencia de condena al pago de intereses moratorios, buena fe, prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 18 de octubre de 2022, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a PROTECCIÓN a reconocer y pagar a LUZ AMPARO RAMÍREZ ATEHORTÚA la pensión de sobrevivencia por la muerte de su hijo SERGIO DANIEL MARÍN RAMÍREZ a partir del 09 de junio de 2019, en cuantía mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, incluyendo una mesada adicional por año. Indicó que el retroactivo calculado hasta septiembre de 2022 asciende a \$38.626.374. CONDENÓ a PROTECCION S.A a reconocer y pagar a la demandante la indexación de las mesadas pensionales reconocidas, calculada desde que cada mesada se hizo exigible y hasta que se verifique el pago total de la obligación. DECLARÓ probada la excepción de compensación, y AUTORIZÓ a PROTECCIÓN para que al momento del pago del retroactivo reconocido en dicha providencia descuente la suma reconocida por concepto de devolución de saldos, debidamente indexada. AUTORIZÓ a la demandada para que de las mesadas pensionales reconocidas descuente las sumas destinadas al pago de la seguridad social en salud y las consigne ante la entidad correspondiente. DECLARÓ probadas las excepciones de improcedencia de los intereses moratorios, procedencia del descuento por salud y no probadas las demás. CONDENÓ en costas a la DEMANDADA y fijó como agencias en derecho la suma de \$1.931.000 equivalente al 5% del retroactivo calculado a la fecha del fallo de 1ª instancia.

IMPUGNACION

La apoderada de la parte demandante interpone recurso de apelación en cuanto a la absolución de los intereses moratorios indicando que se deben condenar a los mismos teniendo en cuenta que el propósito de estos son resarcitorios y no sancionatorios, no interesando la buena o mala fe en la actuación de la demandada al negar la prestación económica por lo que solicita se condene al pago de sus intereses sobre cada mesada causada hasta el pago efectivo de la obligación pensional.

El apoderado de la parte demandada manifestó que se aparta del fallo proferido teniendo en cuenta que el mismo tuvo como fundamento que el ingreso que en vida realizaba el señor Sergio Daniel Marian a su madre era preponderante para su subsistencia, sin embargo, indica que en el mismo fallo se resalta que el valor del aporte que realizaba cada hijo era preponderante sin que sea posible determinar el aporte que realiza cada uno por lo que dicha situación para la apoderada recurrente si es necesario determinar de manera

específica y concreta cuál es el aporte y la totalidad de los gastos del grupo familiar a fin de poder establecer si realmente si existía una dependencia o una subordinación económica en la forma en la que lo quiere hacer ver la parte demandante.

Reitera algunos de los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión indicando que no hay lugar al reconocimiento de la pensión teniendo en cuenta los hallazgos que se tuvieron en cuenta en la investigación administrativa y el resultado de la prueba testimonial que fue practicada en el proceso; en cuanto a la investigación administrativa indica que en la misma se pudo determinar qué a la fecha de muerte del señor Sergio Daniel, la demandante vivía en una vivienda familiar donde no tenía que pagar arriendo y que al momento del fallecimiento el mismo devenga un salario mínimo que ascendía a \$828.116 y prueba de ello es el certificado expedido por el empleador.

Que además Sergio Daniel no era la única persona que realizaba un aporte al grupo familiar el cual además no se pudo establecer, sino que también realiza un aporte su hermana Jenny Marcela que para la fecha en que falleció su hermano devengaba aproximadamente \$2.000.000 y adicionalmente se observa en la página 48 del archivo 11 del expediente digital que el señor Roberto Álvaro Marín Gómez, sí realiza un aporte mensual y a pesar de que no sea alto sí era continuo de \$100.000 lo cual quedó plasmado en la investigación administrativa y que igualmente la demandante así como su hija Jenny Marcela manifestaron en el proceso que la señora Luz Amparo recibía de manera mensual \$70.000 por el cuidado de su sobrino.

Qué llama la atención qué en la investigación administrativa se registra qué el afiliado fallecido realiza un aporte de \$850.000 mensuales, situación que no encaja con la realidad teniendo en cuenta que el fallecido devenga un salario inferior a dicha suma, y qué dicho dinero tenía que restarse la cuota que tenía que pagar de manera mensual por concepto de universidad en el Cesde en dónde pagaba un semestre que costaba \$1.200.000 y que mensualmente tenía que sacar \$200.000 para costear sus gastos de estudio, y adicionalmente, cómo quedó en la investigación administrativa plasmada, Sergio Daniel no solo tenía un crédito sino que también era codeudor de otro, y estos dos créditos en su conjunto arrojan un valor de \$420.000 por lo cual aproximadamente el fallecido tenía unos gastos de casi \$700.000 incluyendo los gastos personales.

Qué partiendo de lo anterior se tiene que aproximadamente el aporte que realizaba Sergio Daniel a su grupo familiar era de \$200.000 y dicho aporte ni siquiera se compadece con lo que manifestó la demandante en la diligencia en la que indicó que su hijo realizaba un aporte de aproximadamente \$350.000 cuando ella indicó y los demás testigos que aportaban aunque no decían el valor del mismo que era para el pago de los servicios públicos y qué cómo se puede observar de la investigación administrativa los servicios públicos para la fecha en que Sergio Daniel fallece ascendían a un monto de \$200.000.

Que si se observa la página 50 de la investigación administrativa se pueden observar varios recuadros en dónde se encuentran plasmados los gastos del grupo familiar antes y después de la muerte de Sergio Daniel y los aportes que se realizan por parte de los miembros del grupo familiar y en el cual se observa que el total de los gastos es de \$424.447, información qué tal y como lo indicó el investigador que fue citado al proceso, fue suministrada por la misma demandante y diligenciada por su hija Jenny Marcela ya que la demandante no recordaba diferentes aspectos relacionados con el aporte que realizaba su hijo para los gastos del grupo familiar.

Qué de dicho cuadro se observan qué se registra que el déficit del aporte vs los ingresos para esa fecha era de \$174.000 y que con posterioridad a la muerte hay un déficit de \$174.000 teniendo en cuenta los gastos del grupo familiar y adicionalmente teniendo en cuenta que Sergio Daniel según el análisis antes mencionado no podía realizar un aporte de más de \$200.000 por lo que infiere que el aporte de este no era necesario.

Qué de lo anterior se observa que él era un miembro más de un grupo familiar en el que por razones lógicas tenía que realizar un aporte determinado para el subsidio de los gastos del grupo y que por esto lo que se desprende más bien del acervo probatorio es que la señora Luz Amparo si recibió un aporte por parte de sus hijos, lo cual no niega, pero indica que lo que le aportaba Sergio Daniel no tenía una connotación de preponderante como para afirmar que el mínimo vital de la demandante a la fecha del fallecimiento se hubiese visto afectado porque incluso aunque el aporte que los hijos realicen a los padres sea continuado, esto no conlleva a la configuración de la dependencia económica pues hay que demostrar de qué manera se desmejoró la calidad de vida del Padre que sobrevive, y en este caso esto no quedó probado, y por el contrario, se encuentra demostrado que la demandante continúa sufragando los gastos de su mínimo vital con el apoyo que siempre ha tenido de su hija

Jenny Marcela quién aduce en el interrogatorio de parte qué es prácticamente la encargada de cubrir los gastos de su madre.

Cita además apartes de la sentencia con radicación 75004 del 14 de julio del 2021 en dónde se indica lo siguiente con respecto al aporte con el fin de demostrar la tendencia económica de los padres respecto a sus hijos "resulta claro que no cualquier contribución hecha por un hijo a las finanzas de sus padres tiene la capacidad de hacerlos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes pues para ello se insiste, es necesario que dependan económicamente de aquel, por lo que la corte ha indicado que si bien la dependencia no debe ser total y absoluta no es cualquier aporte que se le otorgue a los familiares que puede ser tenido en cuenta como prueba determinante para ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio y menos con el establecimiento del sistema de seguridad social cuyo propósito se insiste, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quién les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas"

Por todo lo manifestado solicita se revoque la sentencia y en su lugar se absuelva a la demandada de todas las pretensiones instauradas en su contra.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de la demandada presenta alegatos solicitando la revocatoria de la sentencia y argumentando para ello que que la misma no se ajusta a los parámetros legales en lo que respecta al requisito de dependencia económica de los padres frente al afiliado fallecido, indicando que, para acceder a la prestación económica por sobrevivientes, no solo se requiere cumplir con el requisito de semanas de cotización, sino además, aspectos relativos a circunstancias especiales para los beneficiarios. Para el caso de los padres, se exige respecto del hijo fallecido, la dependencia o subordinación económica a fecha de muerte. Sin la existencia de esa situación a favor de los padres, se hace imposible el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, siendo en consecuencia solamente posible, realizar la devolución de saldos a que hace referencia el artículo 78 de la ley 100 de 1993.

Que si bien es cierto que la dependencia total y absoluta fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-111 de 2006, el concepto de dependencia económica permanece como presupuesto

indispensable para que se configure el derecho a la pensión de sobrevivientes en favor de los padres, lo que significa que, en todo caso debe existir una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda pecuniaria que le proporcionaba el hijo.

Que, la no exigencia de dependencia absoluta, tampoco puede conllevar a analizar este requisito de manera laxa, como lo es que sea suficiente con que se demuestre que la madre de un afiliado que fallece se vea desprovista de una mínima colaboración monetaria, como para que a partir de ello se tenga como cumplido el supuesto de la dependencia y peor todavía si se recuerda lo que muestran las reglas de la experiencia, en el sentido de que desde que un hijo empieza a trabajar, sea soltero o casado, resida o no con sus papas, lo normal es que les dé algún auxilio, en dinero o en especie, sin que ello, por sí solo, los convierta automáticamente en subordinados en términos pecuniarios de su hijo fallecido, y más aún, cuando la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que para que pueda hablarse de sujeción económica es indispensable que el aporte dado sea significativo.

Que, para el caso bajo estudio, de la investigación administrativa realizada por Protección S.A. que fue allegada al proceso con la contestación de la demanda y de las pruebas practicadas en la respectiva etapa de trámite, se estableció que la dependencia económica en los términos establecidos por la ley y la jurisprudencia, no se configura para el caso de la demandante, quedando acreditado lo siguiente:

- Que el inmueble donde reside la señora Luz Amparo Ramírez Atehortua, es de la familia, por lo que no tiene que pagar dinero alguno por este concepto.
- Que el señor Sergio Daniel Marín Ramírez, previo a su fallecimiento tan solo devengaba un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2019, el cual según certificación expedida por el empleador Emtelco S.A.S ascendía a la suma de \$828.116, suma con la cual debía solventar sus gastos personales, gastos de estudio en el CESDE por valor de doscientos mil (\$200.000) pesos mensuales, pago de créditos con el sector financiero por valor de aproximadamente \$200.000 y gastos del grupo familiar.
- Que los gastos del hogar no solo eran solventados por el señor Sergio Daniel Marín Ramírez, sino también por la señora Jenny Marcela Marín Ramírez y el señor Roberto Alvaro Marín Gómez, quien ocasionalmente aportaba para los gastos del hogar en especie.

Que lo anterior fue corroborado en el interrogatorio de parte realizado a la señora Luz Amparo Ramírez Atehortua, quien a través del mismo manifestó:

- Que reside en una vivienda familiar y no paga arriendo desde hace 15 años.
- Que trabajaba cuidando a su sobrino y le pagaban setenta mil pesos mensuales (\$70.000) por dicho concepto.
- Que Jenny Marcela, quien era su otra hija, le ayudaba económicamente, dado que vivía con ella y la apoyaba con el mercado, con aproximadamente doscientos mil pesos (\$200.000) o lo que podía porque también tenía sus gastos.
- Que su hijo Daniel se encontraba pagando el valor de la matrícula de la Universidad, quien además tenía gastos propios para ropa y salidas de esparcimiento que realizaba.

Que corrobora el dicho de la demandante, su hija Jenny Marcela, quien al rendir declaración indicó que, ella aportaba aproximadamente doscientos mil pesos mensuales (\$200.000) y que su madre cuidaba a un sobrino, y por esta labor recibía de manera mensual setenta y cinco mil pesos (\$75.000). Indicó, además, que si bien, su hermano aportaba una parte de sus ingresos para apoyar el pago de los servicios públicos, a la fecha es ella quien sufraga los gastos de su madre, apoyándola en el pago del mercado. De igual forma, manifestó no conocer cuáles eran los gastos totales del hogar. En cuanto a las otras testigos que hicieron presencia en la diligencia llevada a cabo el 18 de octubre de 2022, las señoras Claudia María Ramírez e Inés Ramírez, se resalta que su testimonio no resulta útil para dilucidar los hechos objeto de controversia, por cuanto no conocían el monto aportado por Sergio Daniel, desconocían los gastos del hogar y de qué manera se encontraban distribuidos los mismos entre los miembros del grupo familiar.

Que, por lo anterior de la prueba recaudada, es posible concluir que el aporte que en vida realizaba el afiliado fallecido, tan sólo constituía una mera ayuda o colaboración y no cumple con las características que han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dan lugar a la existencia de la mencionada dependencia económica.

En consecuencia, y no obstante, la demandante aducir su calidad de madre del afiliado fallecido, este requisito por sí solo no es suficiente para generar el derecho a la pensión de sobrevivientes pretendida, y que además cuando los progenitores se benefician de forma conjunta de otros hijos, hay lugar a concluir que dichos aportes dan lugar a predicar la autosuficiencia económica, desapareciendo de esta manera la dependencia. Por lo mencionado solicita se revoque la sentencia.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada por la señora LUZ AMPARO RAMIREZ ATEHORTUA, como madre de SERGIO DANIEL MARIN RAMIREZ, y en caso de ser ello positivo si hay lugar a los intereses moratorios, y las costas del proceso.

Para el caso bajo estudio no existe discusión en que el señor SERGIO DANIEL MARIN RAMIREZ falleció el 08 de junio de 2019, (fls 08 del PDF 03), y no se discute igualmente el vínculo existente entre la reclamante como madre del fallecido según registro civil de nacimiento de folios 06 del PDF 03.

No se discute que el afiliado haya dejado causado al derecho a la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, por lo que resta establecer conforme al recurso de apelación interpuesto es si se acreditó o no la dependencia económica de la madre respecto al hijo fallecido.

Partiendo de lo anterior, el problema jurídico se abordará en el siguiente orden:

I) Normativa aplicable con respecto a la pensión de sobrevivientes, -beneficiarios-; II) la dependencia económica como requisito para adquirir la pensión de sobrevivientes; III) del caso concreto.

1. De la normativa aplicable con respecto a la pensión de sobrevivientes, -beneficiarios-

La norma aplicable es la vigente al momento de la muerte del causante, esto es, la vigente para el 08 de junio de 2019, fecha en la que falleció el señor SERGIO DANIEL MARIN RAMIREZ, esto es, los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003; establece la referida normativa:

“ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

(...)

*2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere **cotizado cincuenta semanas** dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.*

ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

d) *A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante **si dependían económicamente de éste*** (resalto de la sala)

El requisito de las semanas se encuentra cumplido según historia laboral obrante en las páginas 133 y ss del PDF 03, de la cual se desprende que cotizó más de las 50 semanas en los 3 últimos años anteriores al fallecimiento, más exactamente 119.28 semanas. Además, se tiene que la entidad accionada en momento alguno negó la pensión reclamada por falta de cumplimiento de las semanas requeridas.

2. De la dependencia económica.

Esta Sala ha entendido que *“La dependencia económica es la sujeción de una persona hacia otra, por proporcionarle esta lo necesario para sustentar su vida y llevarla de manera moderada, sencilla, decorosa, de acuerdo a su posición social”* (sent. del Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, 13 de marzo de 1998. Jairo de J. Toro M. contra el ISS).

Ahora, según la reiteración de la jurisprudencia de la CSJ la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres-demandantes y, al demandado le corresponde, desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas (CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 36026).

De otro lado, se tiene que desde el año 2003, la Honorable Corte Suprema de Justicia hizo claridad del significado de dependencia económica, al igual que en la sentencia 19.867 del 27 de marzo de 2003, donde sostuvo que esta no debe de entenderse como total y absoluta, no obstante, la misma si debe ser de tal magnitud que afecte la congrua subsistencia del beneficiario supérstite.

Y frente a la dependencia económica, la Corte Constitucional en sentencia C 111 de 2006 definió:

“...La dependencia económica ha sido entendida como la falta de condiciones materiales que les permiten a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, entendida ésta, en términos reales y no con asignaciones o recursos meramente formales”;

Partiendo de lo anterior se advierte tal y como se expuso en sentencia SL 6390 de 2016, radicado 48064 del 13 de abril de 2016, que, la dependencia económica no tiene que ser total y absoluta, lo que indica que, si bien debe existir una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda económica del hijo, dicha situación no excluye que aquellos puedan percibir rentas o ingresos adicionales, a condición que estos no sean suficientes para garantizar su independencia económica, esto es, que esas rentas no alcancen a cubrir los costos de su propia vida (CSJ SL400- 2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630- 2014, CSJ SL6690-2014, CSJ SL14923-2014, CSL SL 319-2019).

3. Del caso concreto:

Para el caso en concreto no existe discusión y se encuentra acreditado en el proceso el vínculo de SERGIO DANIEL MARIN RAMIREZ, como hijo de la demandante, según registro civil de nacimiento de folios 06 del PDF 03.

Así mismo se encuentra demostrado que la demandante realizó solicitud de pensión de sobrevivientes a la demandada y dicha entidad emitió respuesta de forma negativa, argumentando que no se acreditó la dependencia económica requerida para el derecho prestacional pretendido. (página 71 y 72 del PDF 03).

Conforme lo anterior, después de ser valorada en su conjunto las pruebas aportadas al proceso, con base en las reglas de la sana crítica y la libre formación del convencimiento (art. 61 del CPL), considera la sala que, si se acreditó el requisito de la dependencia económica de la demandante con respecto al hijo fallecido, por lo siguiente:

La demandante **LUZ AMPARO RAMIREZ ATEHORTUA** rindió interrogatorio de parte, manifestando que es ama de casa, que el grupo familiar para la fecha en que murió su hijo Sergio Daniel estaba formado por ella, su hijo Sergio, su hija Jenny Marcela y su nieta. Que cuidaba un sobrino y por esto le daban \$70.000 mensuales. Que el valor total de los gastos del grupo familiar era por servicios \$320.000 a \$350.000, alimentación, por ahí \$300.000. Que su hijo se tuvo que salir de estudiar para trabajar y él siempre estuvo a cargo del pago de los servicios públicos, **y de pronto si podía le daba también para la comida.** Que su esposo es ausente y solo le llevaba cuando iba esporádicamente parva o una canasta de huevos. Que su hija le colaboraba

con \$80.000 si necesitaba porque ella también tenía sus obligaciones. Que cuando su hijo falleció estaba estudiando y pagando también su universidad, y que el a veces se desplazaba en bicicleta para la universidad y sino en el metro, y que el empezó a trabajar y aportar para los gastos de la casa cuando salió del colegio desde los 16 años, cuando su hija se fue con su pareja y su esposo se fue con otra entonces quedo sola con Sergio Daniel y por eso él se vio en la obligación de conseguir trabajo. Que desde que falleció Sergio Daniel para los gastos del hogar le colabora su hija con lo que podía sobre todo para la alimentación y con lo que le dio protección por la muerte de su hijo paga los servicios públicos porque no tiene con que pagarlos. Que la casa donde vive es una sucesión de 8 hermanos, pero no paga arriendo. Que no sabe si para el momento del fallecimiento su hijo tenía pareja o salía con alguien. Que los servicios en el año 2019 valían entre \$278.000 y \$300.000. Que después de la muerte de Sergio se ha visto apretadita porque no ha podido cubrir la comida, porque los servicios los pago con lo que le dio protección, refiriendo que eso es como si estuviera Sergio pagando los servicios.

YENNY MARCELA MARIN RAMIREZ, testigo e hija de la demandante manifestó que vivía con su madre desde mas o menos dos años antes de la muerte de su hermano Sergio, Que el grupo familiar esta formado por ella, su mama y su hija porque su padre es ausente, el papa es mecánico independiente y trabaja lo que le va saliendo. Que ella es asesora comercial, y para la época de la muerte era asesora comercial en una multinacional NEW BRAN, donde duró 15 años, pero por pandemia la sacaron en el año 2021 y que allá ganaba como \$2.000.000, y que su hermano previo a la muerte trabajaba en un Call Center en Emtelco pero no sabe cuanto se ganaba, que su grupo familiar estaba formado por su hermano, su madre, su hija y ella. Que cuando vivía con ellos aportaba entre \$150.000 y \$200.000 para la comida según como le fuera con el salario porque también tenía otras obligaciones. **Que su hermano cubría la parte mas amplia** porque ella daba para la comida y su mama cuidaba un sobrino por lo que le daban \$70.000. Que Sergio aportaba para todo lo que era los servicios y una parte del mercado, y ya el resto porque él porque el era el encargado de su mama. Que nadie más aportaba. Que con la muerte de su hermano todo cambió refiriendo que ella quedó a cargo de todo, y que con lo que le dieron ella pagaba los servicios y la comida, pero después de la muerte de Sergio su madre quedó sin EPS ni salud y las citas médicas no las tiene porque no le puede pagar una EPS y tampoco la puede poner como beneficiaria y que esto si lo tenía con su hermano. Que la casa donde viven es familiar. Que cuando no vivía con su

mama era su hermano quien se encargaba de todo lo del mantenimiento de su madre y cuando ella empezó a vivir con ellos solo les aportaba para parte de la comida y ya.

CLAUDIA MARIA RAMIREZ, testigo de la parte demandante manifestó que es ama de casa y sobrina de la señora LUZ AMPARO RAMIREZ, que el hogar para el momento de la muerte de Sergio estaba formado por su mama, su hermana Jenny Marcela y su sobrina. Que Sergio para el momento de la muerte trabajaba en un Call Center, y que su hermana Jenny trabajaba en una empresa de colores y lapiceros, y que el papa era un mecánico independiente pero no sabe cuánto ganaba cada uno de ellos. Que visitaba a su tía cada 8 o 15 días, y que veía que **Sergio era el que mas aportaba** a su tía porque eran ellos dos junticos, y sabe que el el era a cargo de su mama. Que Sergio era el que más aportaba y lo sabe porque él era el que pagaba los servicios, colaboraba con lo que ella necesitara porque el papa les ayudaba muy poco, indicando que Sergio era quien se encargaba de todas las necesidades de su tía, **ella era la beneficiaria de el** y el de daba también para la comida. Que Jenny aportaba en el hogar cuando vivía con su pareja le colaboraba un poco, y cuando Jenny ya vivía con su tía ya llego a aportarle y ayudarle a Sergio, que no sabe cual era el monto de la ayuda de su hermana pero que era mas que todo para la comida. Que Sergio estudiaba para el momento de la muerte, pero no sabe si tenía que pagar estudios o si tenía deudas. Que para el momento de la muerte su tía no era autosuficiente económicamente, no recibía ayuda ni subsidios o no tenia empleo y que los recursos para los gastos personales de su tía se los suministraba Sergio como vestidos y sus cosas personales.

ROSA INES RAMIREZ, testigo de la parte demandante manifestó que es modista y hermana de la demandante quien es ama de casa y nunca ha trabajado y que Sergio el hijo de la demandante murió hace como dos años y para el momento de la muerte vivía con su madre, su hermana Jenny y la hija de esta que tenia 21 años. Que Sergio trabajaba en una empresa de llamadas, pero no sabe cuánto se ganaba. Que Jenny trabajaba, pero tenía la obligación con su hija que estaba estudiando en la universidad. Que el papa de Sergio era muy ausente, él trabajaba independiente como mecánico. Que los gastos del hogar de Luz Amparo eran asumidos por Sergio porque el era el único que veía por ella. **Que Sergio le daba a la mama todo lo que necesitaba, ir al médico, la comida, pagar los servicios**, todo lo que necesita, y que Jenny cuando llegó solo aportaba para la comida. Que la testigo sabe que Sergio era

el único que aportaba porque ella vivía en el segundo piso y sabe que solo tenía esa ayuda no más porque el papa es muy ausente. Que Jenny no aportaba porque tenía la obligación con su niña en el estudio. Que la situación de Amparo cambió con la muerte en lo económico porque no tenía la ayuda de su hijo.

De todas las declaraciones mencionadas se puede concluir con meridiana claridad que la demandante al momento del fallecimiento de su hijo SERGIO DANIEL MARIN RAMIREZ, si dependía económicamente de este pues del testimonio rendido por su hermana el cual ofrece credibilidad a la sala dadas sus expresiones espontáneas y sin ninguna intención de beneficiar a la parte se desprende que esta llegó a vivir a la casa de su madre y su hermano justo dos años antes de la muerte de este, y que todos los gastos de su madre hasta que ella llegó eran a cargo de este, esto es, de Sergio Daniel y que cuando esta llegó solo colaboraba con algo para la comida, con \$150.000 o \$200.000, hecho este concordado además con lo indicado por la demandante cuando indica que los gastos de alimentación para dicha fecha eran por ahí \$300.000 lo que indica que su hijo en ocasiones como estas lo afirman así como los demás testigos tenía que ayudar para la alimentación en ocasiones.

Lo anterior deja entrever, contrario a lo indicado por la apoderada recurrente que el aporte que implicaba solo el cubrimiento de los gastos de la persona que vive en el hogar era el realizado por la hermana del causante para cubrir los gastos de alimentación de esta misma y de su hija, pues se evidencia que lo que suministraba el señor Sergio Daniel para el sostenimiento de dicho grupo familiar era mucho mas que para su propio sustento.

Así mismo se tiene tal y como quedó consignado en la investigación administrativa que SERGIO DANIEL MARÍN RAMÍREZ, se encontraba afiliado a EPS SURAMERICANA S.A, bajo el régimen Contributivo con fecha de afiliación 01 de abril de 2013 en calidad de cotizante, y la señora LUZ AMPARO RAMÍREZ ATEHORTUA, se encontraba afiliada a la EPS SURAMERICANA S.A, bajo el régimen Contributivo en calidad de BENEFICIARIA con fecha de afiliación 09 de noviembre de 2013, hecho este que debe ser relacionado con lo indicado por la señora YENNY MARCELA MARIN RAMIREZ cuando indica que después de la muerte de su hermano su madre quedó en dificultades para cubrir sus necesidades respecto a su salud pues no tenía EPS porque ya no estaba afiada a la EPS desde que Sergio

falleció y que además ella no podía afiliarla como beneficiaria y tampoco tenía para afiliarla como independiente.

Además de lo anterior es relevante mencionar lo indicado por la misma demandante en relación a que después de la muerte de Sergio, los servicios públicos los pagaba con lo que le dio protección por la muerte de su hijo, hecho este que además coincide con lo manifestado por YENNY MARCELA MARIN RAMIREZ, del cual se advierte que efectivamente la demandante después del fallecimiento del señor SERGIO DANIEL MARIN RAMIREZ quedó en dificultades económicas y los gastos que este cubría los tenía que solventar con lo que le dieron por devolución de saldos en protección al no tener ninguna otra fuente de ingresos.

De todo lo mencionado se evidencia que si bien la demandante contaba con un ingreso por los \$70.000 que recibía por cuidar el sobrino más la ayuda que le daba su hija para la alimentación, los mismos no eran suficientes para asegurar su manutención y el aseguramiento de su subsistencia en condiciones dignas por lo que se concluye que la ayuda y suministro que recibía por parte de su hijo fallecido era significativa, constante y necesaria para su congrua subsistencia, debiendo de esta forma CONFIRMARSE la sentencia de primera instancia.

2. De los intereses moratorios.

Respecto a los intereses moratorios establece el artículo 141 de la ley 100 de 1993, *“a partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”*

Así mismo el artículo 01 de la ley 717 de 2001 establece que: “El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho”.

Ahora, partiendo de lo anterior considera la Sala que en su momento le asistía razón a la demandada en negar el reconocimiento pensional pretendido con

fundamento en lo que arrojó en su momento la investigación administrativa donde se determinó que no existía la dependencia económica requerida para el reconocimiento de dicha prestación, y fue solo a través del presente proceso donde se logró demostrar y evidenciar el derecho que le asiste a la parte demandante en el derecho que reclama por haber probado en el presente tramite la mencionada dependencia económica como requisito fundamental para tener derecho a la prestación reclamada.

Por lo anterior lo legal y pertinente será CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

Sin costas en esta instancia por la forma en que se resuelven los recursos. .

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, por las razones argumentadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Las anteriores decisiones se notifican en EDICTO.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ

Sin firma por ausencia justificada

CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: LUZ AMPARO RAMIREZ ATEHORTUA
DEMANDADO	: PROTECCION S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-021-2021-00080-01
RADICADO INTERNO	: 309-22
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 16 de diciembre de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 16 de diciembre de 2022 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO